

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D.C, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-00180
ACCIONANTE	JAIRO SÁNCHEZ BARÓN
ACCIONADO	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DECISIÓN	NIEGA POR HECHO SUPERADO

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela instaurada por el señor **JAIRO SÁNCHEZ BARÓN**, en contra de la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO:

El señor **JAIRO SÁNCHEZ BARÓN** interpuso acción de tutela por considerar vulnerados los derechos de petición, igualdad y mínimo vital que le asisten, con fundamento en los siguientes:

HECHOS (ARCHIVO No.2):

1. Informa que el 19 de enero de 2022 radicó petición ante la entidad accionada, solicitando fijar fecha cierta para recibir cartas cheques para el pago de la indemnización por desplazamiento forzado, a la que afirma tener derecho.
2. Asegura que a la fecha no ha recibido respuesta, no obstante haber diligenciado el correspondiente formulario y actualizado sus datos.

PRETENSIONES:

Por lo tanto, acude el accionante al aparato judicial para que se le tutelen sus derechos fundamentales vulnerados, ordenando a la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, indemnizarlo y contestar de fondo su solicitud.

ADMISIÓN Y LITIS:

La presente acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022), ordenándose notificar a la parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa (archivo No.5).

Fenecido el término concedido a la entidad para su pronunciamiento, contestó oportunamente adjuntando los soportes documentales de su defensa (archivo No.8).

REGLAS DE COMPETENCIA:

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN:

LEGITIMACIÓN ACTIVA:

La parte actora se encuentra legitimada como persona natural del derecho fundamental invocado, teniendo en cuenta que solo se necesita la condición de persona titular del derecho fundamental, cuyo amparo invoca.

LEGITIMACIÓN PASIVA:

La presente acción se encuentra dirigida en contra de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, por ser la entidad que, según el accionante, sería responsable por la acción u omisión vulneradora de los derechos objeto de la presente tutela, se encuentra legitimado el extremo pasivo.

SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ:

En evidente que la parte actora no cuenta con un mecanismo distinto al que nos ocupa para reclamar respuesta a su petición, acción que resulta oportuna en su promoción, dado que la radicación de la solicitud se efectuó el 19 de enero de 2022.

CONSIDERACIONES:

PROBLEMA JURÍDICO:

*Corresponde al Juez de tutela, determinar si al señor **JAIRO SÁNCHEZ BARÓN** se le están vulnerando sus derechos de petición, igualdad y mínimo vital, al no dar respuesta a la solicitud por él elevada.*

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO:

DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO:

Señala el accionante como conculcado el derecho de petición. La Carta Política, lo plasma en su art. 23 como uno de los derechos constitucionales fundamentales que les asiste a las personas a fin de obtener una pronta resolución a las peticiones que de manera respetuosa se hayan elevado a cualquier entidad pública e incluso particular.

El derecho de petición, visto desde la órbita del estado social de derecho, es ante todo un garantizador de la puesta en marcha de la democracia participativa, estableciendo una efectiva relación persona - Estado, cobijando así muchos otros derechos consagrados como constitucionales como el derecho a la información y a la participación política de los coasociados.

El núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la pronta resolución, pues de nada serviría que el ciudadano tuviera la posibilidad de dirigirse a la autoridad si no recibe de ésta una respuesta que resuelva la solicitud elevada.

La respuesta debe ser oportuna, resolverse de fondo de manera clara, precisa y en congruencia con lo solicitado y debe también ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

El caso en concreto:

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que el accionante invoca los derechos de petición, igualdad y mínimo vital, supuestamente vulnerados por la entidad accionada.

Con el escrito de tutela se allegó la misiva dirigida a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, suscrita por el señor JAIRO SÁNCHEZ BARÓN (con dirección electrónica de notificaciones jairosanchezbaron@gmail.com), a través de la cual pregunta cuando se le hará entrega de la carta cheque por indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, se le asigne una fecha exacta para el desembolso en esta vigencia, se le aclare por qué ha sido excluido de pago en las vigencias 2019 a 2021 y, se le expida certificación de inclusión en el RUV. Consta en el referido documento que se radicó el 19 de enero de 2022 bajo el número 2022-711-109333-2 (página 3 del archivo No.3).

La entidad demandada al contestar la acción informó que resolvieron la petición del accionante a través del radicado de salida No.20227206306421 del 10 de marzo de 2022, enviado al correo electrónico reportado y adjuntó prueba de ello (archivo No.8).

Al revisar el documento anexo, es decir, la misiva de fecha 10 de marzo de 2022 con número de radicación 20227206306421 dirigida al señor JAIRO SÁNCHEZ BARÓN, correo jairosanchezbaron@gmail.com, se advierte que frente a la solicitud de la indemnización administrativa le indican que dieron respuesta mediante resolución No.04102019-115204 de 14 de diciembre de 2019 por medio de la cual la Unidad decidió la solicitud de indemnización administrativa reconociendo el derecho a la medida por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y entre otras determinaciones, ordenó dar aplicación al método técnico de priorización para determinar el orden de entrega, y que tal determinación le fue notificada personalmente el 14 de enero de 2020 al señor JAIRO SÁNCHEZ BARÓN, sin que la impugnara.

Refieren igualmente, en lo que concierne a la aplicación del método técnico que, el señor SÁNCHEZ BARÓN no acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021.

Señalan también que, el 30 de julio de 2021 aplicaron el citado método y según el resultado, se concluyó que no es procedente materializar la entrega de la medida de indemnización reconocida al mencionado, razón por la que no fue posible el desembolso en la vigencia de 2021, pero que en el segundo semestre del año 2022 se le aplicará nuevamente de cuyo resultado se le informará.

Por último, expusieron las razones por las cuales no recibió pago en los años fiscales 2019, 2020 y 2021 y la imposibilidad de hacer entrega de la carta cheque reclamada. De igual forma, expidieron y remitieron la certificación del registro Único de Víctimas -RUV.

Adicionalmente, adjuntaron las misivas de 13 de julio de 2020 y 26 de agosto de 2021, por medio de las cuales informan al señor SÁNCHEZ BARÓN que NO es procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria, ante el resultado arrojado por el método técnico de priorización (páginas 12 a 37 del archivo No.8).

Según consta en las páginas 10 y 11 del archivo No.8, la aludida respuesta fue remitida al correo jairosanchezbaron@gmail.com, reportado por el actor como dirección donde recibe notificaciones.

Acorde a lo anterior tenemos que la entidad demandada con ocasión de la presente acción (se admitió el 8 de marzo de 2022), el día 10 de marzo de 2022 contestó la solicitud del accionante, por consiguiente, los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela han sido superados.

Resulta diáfano, que nos encontramos ante un hecho superado, luego este instrumento constitucional de defensa ha perdido su objetivo y en consecuencia resultaría ineficaz, en razón a que el motivo de reclamación ha sido resuelto y no habría lugar a ordenar la ejecución de un hecho que ya se sucedió, pues la orden que pudiera impartir el Juez de tutela no tendría ningún efecto en cuanto a la efectividad del derecho presuntamente vulnerado.

En conclusión, la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa de los derechos conculcados está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.

POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el accionante señor **JAIRO SÁNCHEZ BARÓN**, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (2)

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 32

Hoy 17 de marzo de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

P

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a22829234743d9fb0801954ef6ae1022cf5e96524387fde7dabaa84f298f33c7**
Documento generado en 16/03/2022 07:31:38 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>